

La herencia viva de Berta Cáceres

THELMA GÓMEZ DURÁN

Las balas no consiguieron apagar la lucha de Berta Cáceres, defensora del ambiente y el territorio. Su hija, Berta Zúñiga, tomó la estafeta y su voz ahora se escucha fuerte en los ámbitos de defensa de los bienes naturales del territorio lenca, sobre todo cuando se trata de procurar que el asesinato de su madre no quede impune. Cinco años después del crimen, un juez declaró culpable a uno de los autores intelectuales del hecho, pero aún queda camino por recorrer para que se haga justicia realmente, para que se materialicen los sueños que hoy tiene la mujer que heredó, incluso, el nombre de Berta.

En algún tiempo, cuando las amenazas contra Berta Cáceres arreciaron, Berta Zúñiga tuvo que fingir que no era su hija. En 2015 tomó sus maletas, dejó a su madre y partió de la tierra donde nació: Honduras. Tenía 25 años de edad cuando se refugió en México, donde conoció a otras mujeres que, como “su mami”, defendían los ríos, el territorio y los derechos indígenas. Llevaba unos meses fuera de su país cuando recibió la llamada. La voz de su tío le dio el mensaje: las amenazas se habían cumplido.

Berta Cáceres fue asesinada poco después de las 11:00 de la noche del 2 de marzo de 2016, dos días antes de que cumpliera 45 años. Los asesinos eligieron las balas para callar la voz de esta mujer nacida en La Esperanza, cerca de la frontera con El Salvador; la menor de 12 hermanos, quien desde la adolescencia se unió a movimientos sociales; la activista que defendió los derechos del pueblo lenca y participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH) a los 22 años de edad, cuando ya era madre de dos de sus cuatro hijos —tres mujeres y un hombre—.

Berta Cáceres, como coordinadora del COPINH, denunció las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, las irregularidades, la corrupción y las afectaciones ambientales que se fraguaban alrededor de la imposición de la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, en el occidente de Honduras. Este proyecto, aprobado por el gobierno centroamericano en 2010, tenía

The living legacy of Berta Cáceres

THELMA GÓMEZ DURÁN
thelmalouis@gmail.com

Desacatos 68,
enero-abril 2022, pp. 172-179



DANIEL CIMA EN WIKIMEDIA COMMONS ▶ Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, hablando en el megáfono en una manifestación a las puertas de la Organización de Estados Americanos, Washington, D. C., 5 de abril de 2016.

detrás a Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA), empresa recién creada, cuyos principales accionistas llevan los apellidos Atala Zablah, familia con poder económico y político en Honduras.

Por lograr que se detuviera la construcción de la hidroeléctrica, defender al Gualcarque y a las comunidades que no querían que se represara el río del que dependía su vida, Berta Cáceres recibió el Premio Goldman en abril de 2015, galardón que se considera el Nobel ambientalista. A partir de entonces, su lucha y su nombre resonaron fuera de Honduras.

Pero el Premio Goldman no fue una armadura lo suficientemente fuerte como para proteger su vida: al año siguiente, la asesinaron.

Berta Zúñiga se encontraba en la Ciudad de México cuando recibió la llamada que daría un giro

a sus planes. Ahora ya no tendría que fingir de quién era hija. Todo lo contrario. Si deseaba que el crimen no quedara impune y la lucha de su madre no se perdiera en el olvido, tenía que decir fuerte y claro que ella era hija de Berta Cáceres.

En esos días de principios de marzo de 2016, Berta Zúñiga acordó con sus hermanos, que se encontraban en Argentina, que regresarían a Honduras. Una de sus primeras acciones fue dar una conferencia de prensa y exigir que se investigara la participación de los directivos y accionistas de DESA en el asesinato de su madre.

Si las balas ya no permiten escuchar la voz de la activista, el ataque no impidió que su mensaje continuara. Berta Zúñiga es ahora la coordinadora del COPINH, desde mayo de 2017. La organización sigue trabajando en territorio lenca y no ha dejado

de exigir que se investigue y castigue a todos los que participaron en el asesinato de Cáceres.

Cinco años después del crimen, ocho personas han sido juzgadas; uno de ellos es David Castillo Mejía, ex militar y ex presidente ejecutivo de DESA. El juez determinó que él era uno de los autores intelectuales del homicidio.

En agosto de 2021, cuando apenas había pasado un mes desde que se conoció el fallo contra Castillo, por medio de la plataforma Zoom escuché a Berta Zúñiga. Ella decidió apagar la cámara durante la entrevista. Entonces tenía ya 30 años de edad, pero el tono de su voz hacía que uno pensara que aún era la veinteañera que había buscado refugio en México. La contundencia con que hilvanaba sus frases, inevitablemente, denotaban la herencia de Berta Cáceres:

THELMA GÓMEX DURÁN (TGD): *¿Cuál es el balance que haces de todo el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres?*

BERTHA ZÚÑIGA (BZ): Ha sido un proceso bastante largo y agotador. Si tomamos en cuenta que el sistema de justicia en Honduras tiene una de las tasas de impunidad más altas de la región y responde a intereses económicos y políticos, el caso es emblemático y ha tenido varios momentos importantes. El primero fue cuando se luchó para evitar la desviación de la investigación; desde las instancias de justicia se manejaron otras tesis que pretendían desvincular el asesinato como consecuencia de la labor de Berta Cáceres y su trabajo como defensora en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Ésa fue una lucha durante el primer proceso judicial que condenó a siete personas, dos de ellas vinculadas a la empresa DESA.

Es importante mencionar que al COPINH no se le reconoció como víctima directa, pese a que fue asesinada su coordinadora. Nosotros [los hijos y la madre de Berta Cáceres], como víctimas directas, siempre buscamos posicionar la responsabilidad de la empresa.

Desde el primer día señalamos a [David] Castillo. Mi mami lo señalaba como una potencial amenaza a su vida; ella estaba convencida de que, si algo le pasaba, iba a venir de las acciones de la empresa DESA, y particularmente, de este personaje.

Se logró posicionar y eso quedó marcado en el fallo, el hecho de que David Castillo es coautor intelectual; es decir, no se trata de un solo autor del crimen. Eso abre las puertas a que en el futuro exista enjuiciamiento contra esos que tomaron la determinación.

Lo otro es que en el fallo señalaron su condición de mujer y de indígena lenca como agravantes en el crimen y también el perfil de David Castillo, su perfil militar, su participación dentro del Estado y en las redes de poder que están detrás de sus acciones.

El fallo fue muy importante, es un fallo histórico. Toca esperar la sentencia. En Honduras ha pasado que el fallo puede decir una cosa, pero la sentencia otra. Estamos a la espera de la sentencia.

Lo que sí es que en Honduras no se respetan los tiempos procesales; entonces, seguramente, todavía nos faltan unos cuantos años de espera para estar seguras de que el fallo y la sentencia no tengan regresión.

Hasta finales de agosto de 2021 no se conocía aún la sentencia contra David Castillo.¹ El ministerio público de Honduras y los abogados de la familia de Berta Cáceres solicitaron la pena máxima, la cual, en Honduras, es de 25 años de cárcel. Aunque el fallo contra Castillo es un gran avance, Berta Zúñiga sabe que la justicia no será total si quedan impunes

1 David Castillo, además, enfrenta otro proceso en su contra por fraude. Antes de ser directivo en DESA, trabajó en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, donde obtuvo información privilegiada que se utilizó para beneficiar a DESA, para que obtuviera el contrato para el desarrollo de un proyecto energético en el río Gualcarque.

aquellos que los miembros del COPINH y la familia han señalado como los otros autores intelectuales del asesinato:

BZ: Desde hace varios años venimos señalando a miembros de la familia Atala Zablah —Jacobó, Pedro y José Eduardo— y al señor Daniel Atala Midence, accionistas mayoritarios de la empresa. Existen comunicaciones que muestran el tráfico de influencias, las acciones ilícitas y las campañas de desprestigio que desarrollaron para imponer el proyecto hidroeléctrico; cómo intentaron detener la lucha del COPINH, dirigida por mi madre, Berta Cáceres.

Nosotros tenemos la claridad de que ellos son autores intelectuales; vemos muy difícil poder escalar hasta ese nivel, ya que son personas bastante conectadas con el poder político. Incluso el hecho de que a David Castillo, como presidente de la empresa, se le haya condenado de crímenes en contra de defensores de tierra y territorio es algo sin precedentes.

En Latinoamérica, una de las regiones del mundo con más defensores del ambiente y el territorio asesinados (Global Witness, 2020),² en la que la impunidad reina en lo que respecta a estos crímenes, el caso de Berta Cáceres ha sido emblemático. A diferencia de otros crímenes contra defensores del medio ambiente y la tierra, las víctimas lograron obtener apoyo de organismos internacionales, lo que contribuyó a que el gobierno hondureño aceptara que se creara el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), en noviembre de 2016, para investigar el caso de Berta Cáceres. Este grupo está integrado por cinco abogados especialistas en derechos humanos: los colombianos Liliana Uribe y Jorge E. Molano Rodríguez, el guatemalteco Miguel Ángel Urbina y los estadounidenses Roxana Marie Altholz y Daniel R. Saxon. En octubre de 2017, el GAIPE publicó el informe titulado “Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”.

TGD: *¿Qué enseñanzas deja este juicio?*

BZ: En primer lugar, la importancia del papel de las víctimas coadyuvando en las investigaciones de instituciones con tan poca credibilidad como el ministerio público de Honduras. Reconocemos que, sin todo el esfuerzo de las víctimas, en el sentido amplio, no sólo nosotros como hijos o familiares, no hubiese existido esa presión, esa labor permanente.

Sin los esfuerzos de investigación, como el informe del GAIPE, no hubiese sido posible ni siquiera el enjuiciamiento de David Castillo.

La labor de las víctimas, en el sentido amplio, es fundamental en países donde existen estos pactos de impunidad; donde existen estas altas tasas de deuda respecto a las investigaciones y enjuiciamientos de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ése es un primer aprendizaje importante.

Lo otro es el litigio estratégico. Estos juicios no sólo son esfuerzos jurídicos —aunque el esfuerzo jurídico debe ser de calidad, lo más profesional posible, porque enfrentamos todo tipo de adversidad—, pero se deben abrir otros frentes de lucha, como la comunicación popular, posicionando la información, los criterios, los detalles de lo que está pasando, de lo que sí realmente se está haciendo. Porque muchos medios de comunicación siempre desinformaron sobre este proceso.

La movilización social fue muy importante. El campamento feminista “Viva Berta”, que estuvo durante todo el juicio afuera de la Corte Suprema de Justicia, acampando, es parte de esas expresiones que estuvieron demandando la justicia para Berta Cáceres.

También fue importante la labor de incidencia. Sostener una demanda de justicia por cinco años no ha sido fácil, sobre todo cuando hay tantos

2 En 2019, Honduras se colocó como el país con la tasa más alta de asesinatos per cápita contra defensores del medio ambiente (Global Witness, 2020).



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) BRASIL ▶ Berta Cáceres, fotograma del video de homenaje por el premio póstumo Champions of Earth 2017, de la ONU Medio Ambiente. Disponible en línea: <<https://vimeo.com/214055225>>.

crímenes, tantas violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica.

Aunar todas esas aristas de la lucha: la comunicación, la incidencia, la movilización social, la batalla jurídica y la lucha territorial de base. Porque la lucha en defensa de los ríos continúa.

No sólo son procesos jurídicos, también son procesos políticos. Nosotros decimos que hemos demostrado que los pueblos tenemos la capacidad de derrotar a grandes empresas que tienen financiamiento internacional; hemos logrado demostrar que los pueblos también tenemos la verdad y que somos capaces de desarrollar nuestros propios procesos jurídicos.

TGD: *¿Qué ha pasado con el río Gualcarque?*

BZ: Las aguas del río Gualcarque siguen corriendo libremente. Por la lucha desarrollada por la comunidad

y por el mismo proceso de justicia para Berta Cáceres, el proyecto se detuvo. La comunidad de Río Blanco [la que se movilizó en contra del proyecto Agua Zarca] está haciendo varios procesos de siembra, de cultivo, de recuperación de tierra en la ribera del río.

La lucha continúa. Río Blanco es una de las comunidades que están luchando por el reconocimiento de la posesión de la tierra, para ya no quedar vulnerables respecto a otros intereses. Ahí continúa una lucha bien difícil; ha habido amenazas y agresiones en contra del liderazgo de las mujeres que siguen cuidando la tierra.

Desde el COPINH se lucha en contra de la concesión [para la hidroeléctrica]. A pesar de que ya se metieron dos recursos legales, una inconstitucionalidad y un amparo, no se ha logrado revertir la concesión a este proyecto. Sabemos que no existe una voluntad real del Estado de Honduras para resolver las cuestiones de fondo de estos crímenes, que

tienen que ver con el respeto a las decisiones de las comunidades.

TDG: *Los impulsores de la hidroeléctrica Agua Zarca la presentaban como un proyecto sustentable y necesario para la región. El tiempo ha demostrado que es un proyecto con una historia de corrupción y que se buscó imponer con violencia.*

BZ: Nosotros hemos señalado que es algo bastante importante de evidenciar, de que no sólo son proyectos violadores a los derechos de los pueblos indígenas, violentos, usurpadores de los territorios; también son proyectos corruptos, que han sido dados con base en la corrupción, en la manipulación del Estado.

Uno de los documentos que ellos tenían [la empresa] decía que no era un proyecto viable en el tema ambiental y aun así les entregaron la concesión. Son proyectos corruptos. Y no es una excepción, es el patrón. Por eso hay muchas otras comunidades en otras partes de Honduras, no sólo el pueblo lenca, luchando contra este tipo de proyectos.

TDG: *¿Qué acciones, desde el Estado hondureño, se han realizado para abrir el camino a proyectos extractivos o energéticos en los territorios indígenas?*

BZ: Ha habido varias modificaciones de leyes: la de minas, de aguas, de pesca. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ha creado varias plataformas para la obtención de licencias ambientales en tan sólo 15 días; eso incluso antes de la pandemia. Se modificó el código penal en Honduras para [que en] todos los delitos que tienen que ver con corrupción o fraude en proyectos extractivos se bajen las penas, para que muchas de ellas no se tengan que pagar con cárcel. Lo que se ha logrado detener, hasta el momento, es la ley de consulta, donde dice explícitamente que lo que digan las comunidades no es vinculante, que va a ser una instancia del Estado la que finalmente decida.

El 50% de las leyes creadas o modificadas en Honduras tienen que ver para facilitar proyectos extractivos y de generación de energía.

El Estado también sigue promoviendo esto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, un proyecto viejo, pero que actualmente es algo que se ha ido materializando. Son zonas que representan esas intenciones del Estado de privatizar, de entregar la soberanía y de violentar a los pueblos que luchan por el reconocimiento de su territorio.

TDG: *¿Cómo ha sido la reorganización de la lucha, después de lo que sucedió con Berta?*

BZ: Ha sido un camino bastante difícil. Berta Cáceres no sólo era la compañera del COPINH, sino que era una pensadora estratégica del proceso organizativo. Con su ausencia, el COPINH vivió una cierta orfandad y tuvo que repensar su organización interna.

Es un crimen de alto impacto que crea muchos efectos emocionales, psicológicos; paralización en mucha gente ante el terror que genera un asesinato. En ese sentido, siempre fue muy importante el enfoque colectivo de la lucha y la labor de las mujeres. Ellas, en los momentos de mayor adversidad, han sido quienes han sostenido al COPINH.

Lastimosamente, los crímenes contra defensores y defensoras de la tierra no han cesado. Recientemente han sido asesinados liderazgos del Bajo Aguán [zona que rodea al río Aguán, al norte de Honduras] en total impunidad y con muy poca cobertura mediática.

Por eso nosotras decimos que nuestra aportación, como COPINH, para la no repetición de los crímenes, es la justicia. En Honduras decimos que si en este caso de mi mami, de Berta Cáceres, no logramos romper la impunidad, pues en ningún otro lo haremos. Porque ningún otro tiene tanto acompañamiento, tanta atención alrededor de encontrar justicia.

TDG: *¿Cuáles son las líneas de acción y de defensa que hoy tiene el COPINH?*

BZ: Continuar con la defensa de los territorios y el reconocimiento de la posesión de la tierra por parte de las comunidades indígenas. Eso implica la denuncia permanente en contra de proyectos extractivos o energéticos que han violentado el derecho a la consulta previa libre e informada.

Lo otro es la comunicación popular: continuar con las cinco radios comunitarias del COPINH, ya que son herramientas muy importantes para la lucha y para el pensamiento político.

Como COPINH, estamos pensando cómo aportar a la soberanía de nuestro país, y en ese sentido, continuar en la lucha contra estas expresiones de los gobiernos golpistas, de los procesos antidemocráticos que se han venido instalando en nuestro país.

TDG: *Decidiste tomar la estafeta que dejó Berta Cáceres, ¿qué tan difícil ha sido estar frente al COPINH?*

BZ: Yo crecí durante todo el proceso organizativo del COPINH, entonces fue integrarme más de lleno a un espacio que para mí ya era conocido, no era un espacio nuevo o que yo no entendiera sus dinámicas, su funcionamiento o su historia. Ésa fue una gran ventaja.

Lógicamente, tuve mucho acompañamiento de personas que han hecho el esfuerzo de sostener los procesos de justicia y el proceso organizativo.

Pero no es fácil, porque a veces, cuando una es hija de liderazgos sociales, no es muy fácil aceptar el ser una persona tan pública; el sentirse un poco invadida en el espacio privado. Esas cosas no me son tan fáciles.

Para mí, ha sido una responsabilidad siempre estar ligada a la memoria de lo que es mi mami, de todos los valores que ella representa. El saber que tengo un compromiso de vida con el proceso de la justicia, con la lucha del pueblo lenca. No voy a

poder desvincularme; esté donde esté, pase lo que pase, yo voy a tener esa labor. Ha sido asumir algo que ya sabía, pero ha sido emprenderlo con mayor claridad. Es una gran responsabilidad y a veces es difícil sostener ese peso.

TDG: *¿Qué cosas has tomado del liderazgo de tu madre como inspiración y como guía para tu propio proceso de líder en la defensa del territorio lenca?*

BZ: Los puntos más importantes son la lucha colectiva: esta lucha no debe ser de un grupo muy pequeño de personas, sino que es una lucha colectiva.

Lo otro es la importancia de la labor de las mujeres y la justicia para ellas, ya que eso fortalece la lucha de las organizaciones de base y no puede ser nunca un tema secundario o un tema relegado dentro de los procesos organizativos.

Lo otro es que siempre la lucha local debe conectarse con una lucha nacional, y en la medida de lo posible, con la lucha regional. No sólo ver nuestro problema focalmente, sino tratar de conectar con otros procesos de resistencia a nivel de la región.

La claridad de identificar a los enemigos; identificar esa articulación que se mostró en el crimen contra Berta y que se repite en muchas otras situaciones. La articulación entre el poder militar, el poder económico, el poder político y el papel de actores internacionales. Ese enfoque de ver todas esas dimensiones de la lucha. Ésas son las que yo vería como las principales enseñanzas de la labor que Berta realizó durante su vida.

TDG: *¿Cuáles son los sueños que hoy tiene Berta Zúñiga?*

BZ: Lo primero es vivir en un país más democrático, porque sabemos que todas estas violencias y esta zozobra en la que viven los pueblos indígenas también responde a una política económica y a una lógica represiva que se ha venido instalando en nuestro país.

Nosotras hemos estado buscando la cancelación de todos los proyectos sin consulta en las comunidades indígenas, para evitar la repetición de situaciones como las que se vivió en la comunidad de Río Blanco.

Lo otro es generar mecanismos de mayor autonomía de los pueblos, en los territorios, y

materializar también nuestros sueños sobre energías comunitarias alternativas y todos los proyectos que tengan las comunidades.

Y ojalá que en un futuro no tan lejano el proceso de justicia, que no [sólo] debe terminar con la condena de Castillo, pueda derivar en la responsabilidad de los otros autores intelectuales del crimen. **D**

Bibliografía

- Global Witness, 2020, *Defendiendo el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente*, Global Witness, Londres y Washington, D. C. Disponible en línea: <<https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/>>.
- Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), 2017, *Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres*. Disponible en línea: <<https://www.gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf>>.